



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

RELACIÓN DE ACUERDOS

Órgano de gobierno

Pleno

Lugar	Fecha
Madrid	30 de septiembre de 2020

Acuerdos adoptados

Uno.- Aprobar, con la modificación interesada por el vocal Enrique Lucas Murillo de la Cueva, el acta de la sesión plenaria ordinaria del día 28 de julio del año 2020.

Dos.- Quedar enterado del cumplimiento de los acuerdos adoptados en dicha sesión plenaria.

Tres.- Quedar enterado de los informes de las comisiones y vocales sobre actividades del Consejo en los términos que figuran en el acta.

Cuatro.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-4, de 2 de julio de 2020) para provisión de una plaza de magistrado/a de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por jubilación del anteriormente nombrado, Luciano Varela Castro, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020, acuerda nombrar Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a Ángel Luis Hurtado Adrián.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado. Sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, la trayectoria profesional de Ángel Luis Hurtado Adrián acredita sobradamente su aptitud e idoneidad para ser promovido a la máxima categoría de magistrado del Tribunal Supremo.

El candidato designado ingresó en la Carrera Judicial el 31.01.1983, ostentando el nº 272 de escalafón oficial y con una antigüedad de más de treinta y siete años en la misma y más de treinta y tres en la categoría de magistrado. Destacan sus casi veintinueve años de servicio en órganos judiciales colegiados del orden jurisdiccional penal.

Como juez, estuvo destinado en el Juzgado de Distrito Nº 1 de Telde (01.03.1983 a 19.07.1983), en el Juzgado de Distrito de Puerto del Rosario (08.08.1983 a 12.05.1984), en el Juzgado de Distrito Nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria (08.06.1984 a 20.06.1985) y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arrecife (17.07.1985 a 28.07.1987). Tras su ascenso a la categoría de magistrado, prestó servicio en el Juzgado de Primera Instancia e



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Instrucción Nº 1 de Vitoria (25.08.1987 a 10.02.1988), en el Juzgado de Instrucción Nº 33 de Madrid (19.02.1988 a 23.09.1991), en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid (01.10.1991 a 12.01.1998), fue Presidente de la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid (16.01.1998 a 16.12.2006), tras lo cual pasó a la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (21.12.2006 a 13.06.2019) y, finalmente, en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional (desde 21.06.2019 hasta la actualidad).

En la designación del candidato nombrado, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, el alto grado de conocimiento y experiencia en las materias propias del orden penal, adquiridos a lo largo de su trayectoria profesional mediante el ejercicio de la jurisdicción. En este sentido, tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional. Asimismo, hay que considerar que el candidato designado superó las pruebas de especialización en el orden jurisdiccional penal, anuladas posteriormente en aplicación de la STS de 19 de julio de 2013, pero con los efectos del fundamento de derecho séptimo de la referida resolución del Alto Tribunal.

En efecto, las cinco resoluciones jurisdiccionales son las siguientes:

1ª) Sentencia nº 22/06, de 6 de febrero de 2006, de la AP del Tribunal del Jurado sobre homicidio y la estructura del objeto del veredicto.

La importancia de la resolución se encuentra en el recorrido habido tras haber impugnado el Ministerio Fiscal y la acusación la absolución dictada en la instancia, por cuanto que la estimación del recurso de casación, que dejó sin efecto la sentencia del TSJ, en último término, viene a convalidar la estructura del objeto del veredicto, concebido en la sentencia de instancia a modo de un guion flexible y redactado de manera que quede concretado a lo que es, exclusivamente, el hecho nuclear que se enjuicia.

2ª) Voto particular de 21.05.2012 al auto del pleno 23/2012 de 18 de mayo de 2012 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre extradición: tratamiento de la nacionalidad.

La relevancia de esta resolución se encuentra en que no existían antecedentes previos del mismo a pesar de que el Pleno entendiese que podía encontrar parangón con otros casos examinados de utilización de doble nacionalidad, a conveniencia para eludir la extradición. Dicha relevancia se revela en que el TC, en la ST 232/2012 de 10.12.12 estima el recurso de amparo, restableciendo el derecho a la tutela judicial efectiva, que considera vulnerado por el auto recurrido, y cuya transcendencia está, en definitiva, en que supuso dejar sin efecto la extradición acordada por la mayoría, en sintonía con razonamientos que se hacen en el voto particular.

Igualmente esta decisión del TC es la tercera, a la que preceden otras dos en igual sentido, en sus sentencias 205 y 206 de 2012, ambas de 12.11.2012 (BOE



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

13.12.2012) pues en los tres casos era coincidente el tema objeto de tratamiento, y en todos cuyos casos el Pleno de la Sala de lo Penal había tomado igual decisión de declarar procedente la extradición, y en todos ellos hubo voto particular oponiéndose a ella.

3ª) Voto particular de 11.11.2013 al auto del pleno de 08.11.2013 de la Sala de lo Penal de la AN sobre la ejecución de sentencia (Doctrina Parot).

La relevancia de esta resolución se halla en que muestra la discrepancia con el criterio de la mayoría de la Sala, que hacía extensivos los efectos de la doctrina de la STEDH, de 21 de octubre de 2013, dictada por la Gran Sala, que tuvo trascendentes efectos en la conocida "doctrina Parot", en la medida que supuso una inmediata puesta en libertad de un importante número de individuos, que se encontraban en prisión cumpliendo penas acumuladas muy elevadas, lo que no se discute en el voto que debiera llevarse a efecto, sino la celeridad con que se hizo, porque se considera que, para esa puesta en libertad, no se utilizó el procedimiento adecuado.

4ª) Sentencia nº 16/2014, de 24 de junio de 2014 de la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la AN, sobre terrorismo institucional y financiero.

El alcance de esta resolución estaría en el hecho de que se enjuiciaron los frentes institucional y de financiación de la banda terrorista ETA. Se trataba de los partidos políticos HERRI BATASUNA, BATASUNA Y EUSKAL HERRITARROK, que, sin bien habían sido declarados ilegales por el TC, sin embargo, se da el paso siguiente de considerarlos organizaciones terroristas satélites, en lo que al frente institucional se refiere; y en lo relativo a la financiación se desmonta el entramado que, como un todo global, habían creado a través de las llamadas HERRIKO TABERNAS, uno de los vehículos para obtener ingresos con los que contribuir a financiar ETA.

5ª) Sentencia nº 20/2018 de 17 de mayo de 2018 y voto particular a la misma de 24.05.2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la AN sobre corrupción (Caso GÜRTEL: ÉPOCA I 1999/2005).

La importancia de esta resolución gira en torno al entramado empresarial formado por un grupo de sociedades, que, a través de quien lo forma y lleva su dirección, el principal acusado, consigue introducirse en determinados entes municipales con los que consigue montar un complejo mecanismo de contratación irregular, de la que obtiene importantes beneficios, que luego distribuye entre quienes le favorecen en esos contratos.

Al margen de su actividad jurisdiccional, el Pleno ha valorado que el candidato nombrado ha realizado una relevante actividad docente y científica resumida en los siguientes datos:

.- Profesor en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia en cursos de formación para Policía Judicial (1989 Y 1998 a 2005) y en el curso de acceso al cuerpo de Secretarios Judiciales (1997), profesor-tutor en la asignatura de Prácticum en las Universidades Alfonso X el Sabio (2000 a 2007), Alcalá de Henares (2001 a 2005) y Autónoma de Madrid (2000 a 2003) y



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

profesor colaborador en el Máster en el Ejercicio de la Abogacía de la Universidad Carlos III (2002).

.- Ponente o conferenciante en 19 cursos organizados por el CGPJ y otros órganos. Resaltan la ponencia *"Criminalidad organizada de Europa del Este, la mafia rusa: diferencias y coincidencias con la amenaza yihadista"* en los Cursos de Verano CEU, 2013, o la ponencia *"Lucha contra la droga. Intervenciones telefónicas: Problemática derivada del uso de técnicas especiales en la averiguación del código de identificación de terminales de telefonía móvil y otros"* en el curso "Sobre la prueba en el proceso penal", organizado por la Dirección General de la Policía, 2015.

El candidato nombrado ha participado en numerosos seminarios y estancias internacionales, entre otras, en tribunales penales internacionales y Eurojust (La Haya, 2009), o en el seminario *"Respuesta Judicial al Terrorismo en la UE: Reforzar la cooperación para mejorar la prevención y la reacción"*, organizado por la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, el Instituto de Formación Judicial de Bélgica y el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia de España (Bruselas, 2014, París 2015).

.- Autor de 12 artículos doctrinales, entre los que se encuentran *"Artículo 89 C.P. y expulsión de extranjeros"*, Revista SEPÍN nº 13 -Penal, enero-febrero de 2005 y *"La nueva OEDE"*, en la Revista de la Ley Penal, nº 103, Ed. La Ley, julio 2013; y autor de colaboraciones en 6 obras colectivas, tales como los capítulos *"Accesos informáticos ilícitos"*, *"Estafa informática"*, *"Delitos contra la propiedad industrial e intelectual"*, *"Estafa de inversores y/o de crédito"*, *"Blanqueo de capitales"*, *"Emigración ilegal"* y *"Falsificación de tarjetas de crédito"* en la obra "Reforma del Código Penal. Perspectiva económica tras la entrada en vigor de la L.O. 5/2010, de 22 de junio. Situación Jurídico-Penal del Empresario", Ed El Derecho, 2010, o *"Algún apunte sobre la responsabilidad de la persona jurídica y otros entes colectivos sin personalidad"* en la obra "Persuadir y razonar: Estudios jurídicos, en Homenaje a José Manuel Martín Maza", Ed. Thomson Reuters, Ed. Aranzadi, 2018.

Por otro lado, el candidato designado ha sido vocal en diferentes tribunales de pruebas para acceso a las carreras judicial y fiscal y vocal para acceso por el turno de juristas de reconocida competencia. Asimismo, ha colaborado con la Subdirección General de Informática del Ministerio de Justicia (1998 y 1999) en el programa LIBRA, con la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional en la redacción del anteproyecto de ley de reconocimiento mutuo y OEDE (2013), ha sido investigador en el Grupo de Trabajo sobre "El control y la responsabilidad de los jueces" (3 años) y es miembro del Consejo de Redacción de la revista SEPÍN.

Todo lo expuesto hace de Ángel Luis Hurtado Adrián el magistrado más idóneo, de entre todos los/as solicitantes propuestos/as, para el desempeño de la plaza convocada.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Cinco.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-5, de 2 de julio de 2020) para provisión de plaza de magistrado/a de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por jubilación del anteriormente nombrado, Francisco Monterde Ferrer, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020, acuerda nombrar magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a Javier Hernández García.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado. Sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, la trayectoria profesional de Javier Hernández García acredita sobradamente su aptitud e idoneidad para ser promovido a la máxima categoría de magistrado del Tribunal Supremo.

El candidato designado ingresó en la Carrera Judicial el 08.02.1990, y cuenta con una antigüedad de más de treinta años en la misma y más de veintiocho en la categoría de magistrado. Destacan sus más de veinte años de servicio en órganos judiciales colegiados del orden jurisdiccional penal.

Como juez estuvo destinado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de El Vendrell (05.03.1990-19.02.1992). Una vez que ascendió a la categoría de magistrado sirvió, por orden cronológico, en los siguientes destinos: Audiencia Provincial de Lleida (09.03.1992-04.12.1993), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 9 de Tarragona (15.12.1993-27.03.1996), Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Tarragona (03.04.1996-23.12.2005), presidencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Tarragona (31.12.2005-22.07.2009), presidencia de la Audiencia Provincial de Tarragona y de su Sección 4ª (desde 28.07.2009 – 21.01.2020) y, finalmente, presidencia de la Sección nº 1 de Apelación Penal de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El candidato nombrado también acredita una notable experiencia en órganos gubernativos. Así, fue Juez Decano de los Juzgados de El Vendrell (Tarragona) entre los años 1991 y 1992, y es Presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona desde el 28.07.2009 a la actualidad (miembro del Pleno y de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña desde 2009 a la actualidad).

Además, fue profesor ordinario del Área de Instrucción de la Escuela Judicial durante el periodo 1999 a 2003.

En la designación del candidato nombrado, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, el alto grado de conocimiento y experiencia en las materias propias del orden penal, adquiridos a lo largo de su trayectoria profesional mediante el ejercicio de la jurisdicción. En este sentido, tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional. Asimismo, hay que considerar que el candidato



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

designado superó las pruebas de especialización en el orden jurisdiccional penal, anuladas posteriormente en aplicación de la STS de 19 de julio de 2013, pero con los efectos del fundamento de derecho séptimo de la referida resolución del Alto Tribunal.

Las cinco resoluciones destacadas, así como los motivos de su relevancia, son las siguientes:

1ª) Sentencia del Tribunal de Jurado 9/2002, de 9 de diciembre de 2004, de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 2ª) sobre asesinato y violación.

La relevancia de esta resolución es que se trata de un análisis novedoso de las consecuencias que, en orden al aprovechamiento probatorio, se derivan del descubrimiento por un particular de evidencias de un delito mediante la vulneración de los derechos fundamentales de la persona acusadas – reflejo de la fundamentación en el voto particular a la STS de 26 de junio de 2013. Identificación del fundamento constitucional de la regla de exclusión probatoria. Presupuestos contextuales de eficacia y preservación del principio de integridad y modulación de los efectos, atendidos los fines específicos de protección. Se aborda también con criterios normativos materiales novedosos el juicio individualización de la pena, distinguiéndose entre el juicio de culpabilidad reclamado para fundar la pena del juicio de culpabilidad a la hora de determinar la pena puntual. Este se nutre de específicos marcadores de desvalor de acción y de resultado, tomando en cuenta la perspectiva de la víctima. La pena se fijó por encima de la pretendida por las acusaciones, antes del cambio de doctrina constitucional ex STC 155/2009.

2ª) Sentencia 3/2019 de 19 de julio de 2019 de la Audiencia de Tarragona (Sección 4ª) sobre abuso sexual.

El motivo de importancia de esta resolución radica en el tratamiento que se realiza del error de prohibición así como en el alcance y sentido del deber de civilidad en un contexto de pluralismo social, cultural e ideológico. La Constitución pluralista es compatible con la exigencia razonable de deberes de atención, cuidado y diligencia. Delimitación del daño extra patrimonial desde la perspectiva de la víctima, como fundamento de la responsabilidad civil. La necesidad de identificar los niveles de calidad de vida afectados por el hecho delictivo.

3ª) Sentencia 25/2014, de 3 de abril de 2018, de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 4ª) sobre abuso sexual.

El interés de esta resolución radica en varios aspectos. En primer lugar, analiza el alcance de la condición de procedibilidad del artículo 191 del CP concretamente, el momento procesal en el que se aborda, los criterios materiales de evaluación de la voluntad de denuncia desde la perspectiva de la víctima y los derechos de intervención y respeto a su autonomía personal que se previenen tanto en la Directiva 29/2012 como en la Ley 4/2015; las consecuencias sobre la acción penal ejercitada por el Ministerio Fiscal. En segundo lugar, aborda la cuestión de la valoración probatoria de determinada



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

información testifical aportada por una de las denunciadas veinte años después de producirse el hecho generador. Se profundiza sobre los estándares aplicables a la luz de los factores situacionales que contextualizan el hecho, con especial atención a la perspectiva de la víctima. Y en tercer lugar, se enfrenta a la determinación del momento consumativo de las lesiones psíquicas producidas en un contexto de agresión sexual para fijar el diez a quo del período prescriptivo aplicable.

4ª) Sentencia 34/2012, de 21 de febrero de 2015, de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Cuarta, sobre asesinato y robo con violencia en casa habitada.

La relevancia de esta resolución versa en el tratamiento previo que se lleva a cabo de las cuestiones de nulidad. La proyección de la nulidad de fuentes de prueba declarada por un tribunal sobre otro proceso en curso. El estándar de valoración probatoria basado en la fiabilidad de la información aportada por un testigo. Cautelas valorativas con relación a un testigo que sin ostentar la condición de acusado en el proceso mantiene una relación con los acusados que sugiere coparticipación criminal, al menos, en otros delitos. Criterios de imputación y de delimitación de las formas de participación. Identificación del espacio normativo de separación entre la coautoría y el grupo criminal.

5ª) Sentencia 161/2019, de 1 de abril de 2019, de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 4ª) sobre pronunciamiento anulador de la sentencia y del juicio.

La relevancia de esta resolución está en el análisis exhaustivo que se lleva a cabo de los presupuestos de revisión con alcance anulador de una sentencia absolutoria basada en la valoración de las informaciones probatorias procedentes de medios de prueba personal a partir de la nueva regulación del recurso de apelación introducido mediante la ley 41/2015. Concretamente, se lleva a cabo una especial atención al concepto de irracionalidad.

Al margen de su actividad jurisdiccional, el Pleno ha valorado que el candidato nombrado ha realizado una amplísima actividad docente y una fructífera actividad científica, muy resumida en los siguientes datos:

.- Además del periodo como profesor ordinario del Área de Instrucción de la Escuela Judicial durante los años 1999 a 2003, el candidato nombrado ha sido profesor en la Universitat Rovira i Virgili (1994-1999 y 2009-2013), en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Tarragona (2002-2009), en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universitat Pompeu Fabra (2011-2015), en el Máster en "Criminología y sistema de justicia penal" de la Universitat de Lleida (2000 y 2001), así como docencia en el Máster Compliance Penal en la Universidad de Barcelona (2015-2018).

.- Ponente o conferenciante en 62 cursos, jornadas y mesas redondas organizados por el CGPJ. Resaltan las ponencias sobre *Justicia y Big Data* (2018), *las reformas del proceso penal* (2018) o *Ética y función judicial* (2019).



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Asimismo, ha sido docente o ponente en otras 14 actividades impartidas en Formación inicial del CGPJ, ponente en otros 138 cursos, seminarios y jornadas organizadas por otras instituciones nacionales e internacionales y hay que destacar, también, que ha sido docente en otras 30 actividades en el marco de la cooperación internaciones. Entre estas últimas destaca que ha sido consultor y capacitador del Curso sobre "*Redacción de sentencias penales*" para jueces y magistrados del Poder Judicial de Tabasco, (Convenio del Tribunal Superior de Tabasco y la Universitat Pompeu Fabra) Méjico, 2015; docencia en el curso de especialización para jueces y fiscales del Principado de Andorra, organizado por el Consell General de Justícia, 2015; capacitador en el curso de especialización penal "*La valoración de la prueba*", Escuela Judicial Arturo Zeledón Castrillo-USAID, El Salvador, 2018.

.- Autor de más de 50 artículos doctrinales, entre los que destaca "*Niños y niñas con discapacidad, victimización y proceso penal: algunas reflexiones*", Diario La Ley, 2019, y "*Ética judicial y deberes de motivación*", Cuadernos Digitales de Formación, 2019; y autor de colaboraciones en más de 60 obras colectivas, tales como "*Notas sobre la Directiva 2011/99, reguladora de la orden europea de protección*", en la Construcción de Europa a través de la Cooperación Judicial en Materia de Protección de las Víctimas de Violencia de Género, Ed. Tirant lo Blanc, 2019; y "*Los tipos y clases de penas*", en Camacho Vizcaíno, Antonio, Tratado de Derecho Penal Económico, Ed. Tirant lo Blanc, 2019.

Por otro lado, el candidato designado ha sido director o coordinador de 14 cursos organizados por el CGPJ, co-redactor de la Guía para la tramitación de Causas Complejas (CGPJ, 2017), director de grupos de investigación (CGPJ), coordinador de la Crónica sobre la Jurisprudencia Penal del Tribunal Supremo para la Revista del Poder Judicial (2004-2010) y Delegado del TSJ de Cataluña para el Foro de Discapacidad (2015 a la actualidad).

Todo lo expuesto hace de Javier Hernández García el magistrado más idóneo, de entre todos los/as solicitantes propuestos/as, para el desempeño de la plaza convocada.

Seis.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-6, de 2 de julio de 2020) para provisión de plaza de magistrado/a de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, vacante por jubilación del anteriormente nombrado Alberto Gumersindo Jorge Barreiro, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020, acuerda nombrar Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a Leopoldo Puente Segura.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado que, sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, acredita su aptitud e idoneidad para ser nombrado Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Leopoldo Puente Segura ingresó en la Carrera Judicial en 1990, por lo que actualmente ostenta una antigüedad de más de treinta años en la misma y más de veintiocho en la categoría de magistrado. Es Abogado Fiscal en excedencia desde el 02.03.1990, misma fecha en la que tomó posesión de su cargo en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra (nombramiento como Abogado Fiscal en fecha 12.02.1990).

Así, tras ingresar en la Carrera Judicial, sirvió como juez en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Cambados (05.03.1990 a 15.05.1991). Tras ascender a la categoría de magistrado al superar las pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil y penal, previstas en el artículo 312.1 de la LOPJ, estuvo destinado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Huelva (31.05.1991 a 04.12.1993); Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Segovia (21.12.1993 a 20.06.1996); Sección Única de la Audiencia Provincial de Cuenca (08.07.1996 a 05.01.2010); Sección 26ª de la Audiencia Provincial de Madrid (22.01.2010 a 21.11.2018) y, finalmente, en la Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (desde 28.11.2018 hasta la actualidad).

En la designación del candidato nombrado, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, el alto grado de conocimiento y experiencia en las materias propias del orden penal, adquiridos a lo largo de su trayectoria profesional mediante el ejercicio de la jurisdicción. En este sentido, tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

En efecto, las cinco resoluciones jurisdiccionales son las siguientes:

1ª) Sentencia procedente del Juicio Rápido 27/2014, de 23 de octubre de 2014, de la AP de Madrid (Sección 26). En la misma se resuelve un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal.

El juez de lo Penal había entendido que el artículo 153.1 del CP exigía en el sujeto activo una suerte de elemento subjetivo adicional consistente en haber realizado la conducta con el explícito propósito de someter o subyugar a su víctima. Se entendió que, frente al criterio mantenido por algunas otras AP, y en la que se consideraba adecuada interpretación de la doctrina establecida por el TC al desestimar las cuestiones de constitucionalidad suscitadas frente a dicho precepto, que dicho elemento subjetivo adicional no resultaba necesario (colmando el dolo las exigencias subjetivas predicables de dicho precepto). Esta resolución resulta jurídicamente relevante en la medida en que, al tiempo en que fue dictada, existía al respecto una interpretación divergente entre las diferentes AP de España. Comoquiera que era muy difícil que estas materias pudieran llegar al conocimiento del TS (habida cuenta de que entonces sólo era posible interponer recurso de casación contra las sentencias dictadas en única instancia por las AP), la doctrina establecida en ella, y compartida también por la Sección



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

27º de la AP de Madrid (igualmente competente en exclusiva para el conocimiento de los delitos relacionados con la violencia de género), pudo contribuir a esclarecer el modo más adecuado para la aplicación de este precepto (y de otros que se hayan en idénticas circunstancias, como el artículo 172.2 y el 171.4 del Código Penal), en el ámbito, al menos, de los Juzgados de lo Penal de la provincia de Madrid.

2ª) Sentencia relativa al PA 206/2016, de 10 de mayo de 2017, de la AP de Madrid Sección 26ª, sobre el valor probatorio de las grabaciones de vídeo efectuadas por una particular (la víctima) desde unas cámaras colocadas en el interior de su vivienda, grabando hacia el exterior y en un garaje propiedad de una comunidad de vecinos y con la autorización de ésta, a fin de conocer la identidad de la persona que repetidamente causaba daños en sus propiedades.

Esta resolución sostenía el apelante que el resultado de dichas grabaciones debía reputarse nulo, en la medida en que había vulnerado su derecho a la intimidad y a la propia imagen, al no haberse contado con su consentimiento para captar las imágenes ni haber sido acordada la grabación por la autoridad judicial.

3ª) Sentencia relativa a procedimiento de recursos de la Ley del Jurado, 285/2018, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid.

Además de recurrir los condenados en la primera instancia, se alzaban también contra la sentencia dictada por el Magistrado – presidente del Tribunal del Jurado, las acusaciones, pública y particular, por entender que aquél, en el relato de hechos probados de su sentencia, se había apartado del veredicto emitido por el colegio de jurados. Las acusaciones consideraban vulnerado en la sentencia impugnada su derecho a la tutela judicial efectiva, por entender que el Magistrado – presidente se había apartado en la redacción de hechos probados de su sentencia, de los que así tuvo por acreditados en su veredicto el colegio de jurados. En efecto, dos de las proposiciones que los miembros legos del Tribunal habían considerado acreditadas, resultaron refundidas en una sola por el Magistrado Presidente al tiempo de trasvasarla al “factum” de su resolución, alternando, a nuestro juicio, la significación jurídica de lo probado.

4ª) Sentencia del procedimiento Recursos Ley del Jurado 157/2019, de 3 de julio de 2019, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, sobre un delito de abuso sexual sobre menores. Error de tipo y error de prohibición. Déficit moderado de capacidad intelectual y carencias en la socialización del acusado. Problemas relacionados con la responsabilidad civil.

Con relación a la tipificación penal de cualesquiera actos de carácter sexual sobre menores de 16 años, límite de protección que se eleva a partir de la LO 1/2015, de 30 de marzo, frente a los 13 años de la regulación anterior, no resulta infrecuente que se aduzca por los acusados la existencia de un error, vencible o invencible, de prohibición. En este caso, además, resultaba acreditado que el acusado presentaba un déficit moderado en su capacidad intelectual y pertenecía a una etnia minoritaria, destacando el recurrente que en ese ámbito



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

eran frecuentes, no ya las relaciones sexuales, sino incluso los matrimonios a partir de un determinado rito, entre personas menores de 16 años. Y justo ese déficit moderado en la capacidad intelectual del acusado, se invocaba que el mismo apenas sabía leer y escribir y que había desarrollado siempre su vida en ambientes cerrados y marginales, que le habían dificultado, o impedido seriamente, su proceso de socialización. El recurrente negaba además que se hubieran acreditado perjuicios para la víctima que determinaran la exigencia de imponer al condenado ninguna clase de responsabilidad civil.

5ª) Sentencia relativa al procedimiento de los Recursos de la Ley de Jurado 162/2019, de 18 de julio de 2019, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid. Se trataba de un recurso de apelación contra sentencias absolutorias: límites de las facultades del órgano jurisdiccional ad quem. Calificación del compromiso de asistir al ejecutor material del delito tras la comisión de éste y el previo acuerdo con aquél. Diferencias entre el encubrimiento y la promesa de encubrimiento como forma de complicidad.

Se condena en segunda instancia a las acusadas absueltas como cómplices de un delito de asesinato. Esta resolución resulta de interés en atención a que las acusaciones pretendían que se procediera por el tribunal, como así efectivamente obtuvieron, el dictado de una sentencia de sentido condenatorio respecto de dos acusadas que habían sido absueltas en la primera instancia. Y ello sin desconocer los estrechos márgenes que para tal eventualidad se determinan como consecuencia de los Tratados internacionales suscritos por España y de la doctrina que, en su desarrollo, ha venido elaborando el TEDH, asumida, naturalmente, por el TC y el TS español. Después de analizar, la posibilidad que en este caso tenía el Tribunal ad quem de revisar la calificación jurídica de los hechos, sin necesidad de modificación alguna en el relato de los probados, se entró a valorar las pretensiones de la acusación, considerando que, en efecto, procedía condenar a las acusadas como cómplices de un delito de asesinato. Subsano el defecto en la redacción de los hechos probados que entonces se apreció, el Magistrado presidente entendió que, ello no obstante, debía mantenerse la absolución de las acusadas como cómplices del delito, por cuanto su intervención material en el mismo resultó ser posterior a la comisión del ilícito penal, juzgando así que dicha conducta sólo debía ser calificada como encubrimiento, sin que fuera posible la condena por este título de incriminación, habida cuenta de que no se había formulado acusación por encubrimiento, así como también por imperativo de la excusa absolutoria prevista en el artículo 454 del CP.

Al margen de su actividad jurisdiccional, el Pleno ha valorado que el candidato nombrado ha realizado una notable actividad docente y científica resumida en los siguientes datos:

.- Fue profesor asociado de la Universidad de Castilla La Mancha, impartiendo asignaturas de Derecho Penal III y IV (troncales), entre los cursos 1999/00 y 2003/04.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

.- Ha sido ponente o conferenciante en 4 actividades organizadas por el CGPJ, así como en otros 22 cursos, seminarios o jornadas organizadas por otras instituciones, con una predominancia clara en materias penales sustantivas y procesales. El candidato nombrado ha sido profesor-tutor del curso virtual "*Iniciación en formación de violencia de género*", organizado por el CGPJ en su 4ª edición en 2019,

.- Es autor de 4 monografías - entre las que destacan "*Suspensión y sustitución de las penas*" (Ed. La Ley, 2009) y "*Violencia de género. Aspectos jurídico-penales fundamentales*" (Ed. CEF, UDIMA, 2019) -, autor de 10 participaciones en obras colectivas - entre las que resalta "*La Ley de Enjuiciamiento Criminal y La Ley del Jurado*" (Ed. Colex, desde su 15ª a 19ª edición en 2012) - y autor o coautor de diversos artículos doctrinales, como "*La multireincidencia*" en la Revista General de Derecho Penal, núm 2, noviembre de 2004.

Todo lo expuesto hace de Leopoldo Puente Segura el magistrado más idóneo, de entre todos los/as solicitantes propuestos/as, para el desempeño de la plaza convocada.

Siete.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1-1.1, de 8 de septiembre de 2020) para provisión de la presidencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, vacante por finalización del mandato del anteriormente nombrado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020, acuerda nombrar Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a César Tolosa Tribiño.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, que acredita su aptitud e idoneidad para ser nombrado Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

1.- César Tolosa Tribiño ingresó en la Carrera Judicial en 1982, por lo que ostenta una antigüedad en la misma de más de 38 años.

Sus destinos, por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión), son los siguientes:

Como juez sirvió en el Juzgado de Distrito de Molina de Aragón (22.11.1982-16.09.1983), después en el Juzgado de Distrito de Arenas de San Pedro (29.09.1983-25.06.1984) y, finalmente, en el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Palma (19.07.1984-08.11.1984). Tras promocionar a la categoría de magistrado, estuvo destinado en la Magistratura de Trabajo núm. 1 de Santander (17.11.1984-20.01.1989), en el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander (20.01.1989-01d.12.1989), en el Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (05.12.1989-12.01.1993).

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 30 de septiembre de 2014, de conformidad con lo establecido en los artículos 599.1.4.ª, 343 y 344.b) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, mediante Real Decreto 890/2014, de 10 de octubre, fue



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

promovido a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, tomando posesión el 03.11.2014.

2.- El magistrado César Tolosa Tribiño es de todos los candidatos/as quien acredita mayor experiencia gubernativa, tanto desde un criterio temporal como de contenido en atención a los cargos judiciales desempeñados. Principalmente porque ha ejercido prácticamente durante dos mandatos el cargo de Presidente de Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (10.12.2004 a 27.10.2014), habiendo desplegado una intensa actividad en el gobierno judicial, jalonada con diversos reconocimientos por parte del CGPJ y otras instituciones. Complementa esta actividad de gobierno, el haber sido Decano (hoy es la figura del delegado) de los Juzgados de lo Social de Santander (1985-1989), Presidente de la Sala C-A TSJ Cantabria (12.01.1993 a 03.12.2004), y en la actualidad, proyecta su implicación en campo gubernativo al ser miembro -electo- de la Sala de Gobierno del TS (11.12.2019 a la actualidad).

El candidato nombrado ha combinado la faceta de gobierno y la jurisdiccional a lo largo de su trayectoria profesional, y ha acreditado tener un perfecto conocimiento de la situación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Así, después de realizar unas consideraciones generales sobre la situación la Sala, la situación postcovid 19, el resumen de asuntos de distintas anualidades y el recurso de casación, presenta un programa de actuación con las siguientes propuestas:

.- Sobre el nuevo recurso de casación y con la experiencia adquirida, propone algunas reformas procesales:

1º) La aplicación analógica de la posibilidad prevista para el procedimiento ordinario en el artículo 63.1 de la LJCA, que permite el señalamiento preferente de asuntos, a fin de que se tramiten y señalen para votación y fallo, con preferencia sobre cualesquiera otros, los recursos de casación en los que, sobre la misma materia, se advierte una fuerte litigación subyacente en los juzgados y tribunales de instancia. Si estos recursos se resuelven con prontitud, y se fija con claridad la doctrina jurisprudencial, se pondrá freno a la constante llegada de multitud de asuntos prácticamente iguales al Tribunal Supremo.

2º) Regulación de la suspensión de actuaciones en los juzgados y tribunales inferiores de este orden jurisdiccional cuando se haya admitido un recurso de casación que verse sobre la misma cuestión que se debate en los procedimientos en curso.

Por añadidura, la repetición de recursos ante el Tribunal Supremo con contenido coincidente produce una consecutiva reiteración de sentencias de casación también coincidentes, que se limitan a repetir casi mecánicamente una doctrina jurisprudencial ya sentada, sin aportar nada nuevo al tráfico jurídico, pero impidiendo entre tanto el abordaje y solución de asuntos pendientes todavía no resueltos y necesitados de pronta respuesta".

Finalmente, añade que otra medida que ayudaría a dar agilidad al trámite de admisión, sin restar garantías a las partes, sería la de posibilitar que los asuntos



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

repetitivos que ya han obtenido sentencia desfavorable, pero que han sido objeto de admisión, pudiesen resolverse por Auto, evitando el dictado de múltiples sentencias repetitivas.

.- Plantea el candidato nombrado la necesidad de incrementar la plantilla de letrados/as del área de contencioso-administrativo del Gabinete Técnico, ante todo para poder despachar con más garantías los miles de recursos de casación que acceden a esta Sala Tercera, y también para poder ofrecer a la Sala una labor auxiliar que actualmente no puede desempeñarse por falta material de personal, de documentación y asistencia técnica -en cuanto la presidencia de la Sala considere oportuno- en relación con la labor de enjuiciamiento de los recursos de casación ya admitidos.

.- Resulta altamente conveniente, según el candidato designado, reforzar las relaciones institucionales con tales operadores jurídicos, esencialmente cuando se traten de implementar medidas que supongan cambios organizativos con repercusiones en el ámbito externo de las relaciones de la Sala.

.- La transparencia de la actividad pública es una manifestación y un requisito típico de los sistemas democráticos que tiene como objetivo el sometimiento al escrutinio público de las actividades y resultados de los distintos poderes del Estado, incluido el poder judicial.

Un instrumento de suma importancia es el Protocolo de Comunicación de la Justicia, aprobado por la Comisión de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial el 30 de junio de 2004 y posteriormente actualizado, hasta el texto actual de 28 de mayo de 2020

En la introducción de dicho Protocolo, se describe la filosofía en materia de transparencia y publicidad, reflexiones que comparto plenamente, tal como acredité en el desempeño de la presidencia del TSJ de Cantabria, labor que fue reconocida con el Premio Calidad de la justicia a la transparencia.

Desde la Presidencia de la Sala se deben hacer realidad los principios básicos de dicho Protocolo.

Otro campo de actuación, pasa por meditar acerca de las medidas relativas a la forma en que nos relacionamos con los usuarios de la Justicia, quiero significar que las quejas de los ciudadanos, según el Informe de la Unidad de Atención al Ciudadano del CGPJ junto a las quejas por dilaciones, aparece en segundo lugar destacado las que se refieren al derecho a una justicia atenta.

.- Implementación de medios tecnológicos. A lo largo de los próximos meses resulta necesario implantar en la sala la aplicación Minerva Digital, si bien, al objeto de conseguir una mayor flexibilidad en el acceso al sistema, que permita que el mismo no deba realizarse desde el puesto de trabajo, convendría sustituir el actual acceso por el método cliente servidor, al sistema de acceso por entorno web.

Dicha implantación permitiría contar con el instrumento de comunicación, esencialmente con la utilización generalizada el sistema Lex Net, pero, lo que es muy importante para esta sala, permitiría el acceso a los expedientes



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

administrativos a través de la aplicación "Cargador de Expedientes", facilitando no sólo el acceso, sino priorizando el orden en su examen.

Otro instrumento de gran valor, actualmente inutilizado es el Visor de Documentos "Horus", con la importancia que supone la incorporación al expediente judicial, no sólo de documentos escritos, sino también de video y audio, herramienta especialmente útil en nuestra Sala para el visionado de pruebas periciales y vistas).

Otra aplicación infrautilizada hasta el momento es el "Portafirmas", incluido en Minerva digital, que permite secuenciar el proceso de firma de resoluciones. Una cuestión de sumo interés, pasaría por desterrar definitivamente la utilización de Lotus Notes, herramienta claramente superada y que debería sustituirse por otras más modernas y que brinde mejores prestaciones.

.- Con independencia de las medidas de carácter procesal a que se ha hecho referencia, anteriormente, el candidato nombrado considera conveniente, citar otras que por su interés pueden redundar en un mejor ejercicio de la función jurisdiccional.

1º) Necesidad de reformar globalmente la planta de la jurisdicción contencioso-administrativa para instaurar la doble instancia. Con carácter general, es un lugar común en la crítica del sistema vigente contencioso-administrativo la inexistencia de una verdadera doble instancia, que por el contrario sí existe en los demás órdenes jurisdiccionales.

2º) Necesidad de regular el recurso de casación autonómica. Como es bien sabido, la reforma de la Ley Jurisdiccional 29/1998 por la L.O. 7/2015 introdujo el llamado recurso de casación autonómica, pero no lo reguló. No se ha detallado con claridad su objeto, ni se ha previsto la forma de componer la Sala de casación (problema especialmente acuciante cuando se trata de Tribunales Superiores de Justicia con una sección única), ni se ha determinado el procedimiento aplicable. Tampoco se ha regulado el régimen de compatibilidad y/o preferencia en caso de interposición por la misma parte del recurso de casación estatal y el autonómico (lo que sucede con frecuencia cuando en el mismo pleito se han interpretado y aplicado a la vez normas estatales y autonómicas) Es urgente un abordaje legislativo de estas cuestiones.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de 3 sentencias, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional. Las sentencias fueron comentadas en su comparecencia ante la Comisión Permanente en funciones de Calificación, manteniendo un diálogo sostenido con la ponencia de alto nivel jurídico, dando muestras de un excelente conocimiento de la arquitectura institucional de nuestro ordenamiento jurídico tanto en su dimensión nacional interna (relaciones entre el Derecho estatal y el de la CCAA) y principalmente con el Derecho de la Unión Europea y el papel que le corresponde al Tribunal Supremo. La relevancia de la Sala de lo Contencioso-



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Administrativa del TS en orden al control de la Administración Pública y otros poderes del Estado.

Estas 3 sentencias son las siguientes:

1ª) Recurso Ordinario 599/2017 de fecha 9 de junio de 2018 Sala contencioso del Tribunal Supremo, relativo a materia de asilo.

Es bien conocida la grave crisis migratoria que se produjo en Europa, a raíz de la avalancha de refugiados que intentan cruzar el Mar Mediterráneo, como consecuencia del conflicto de Siria. En el año 2015, el Consejo de la UE adoptó las Decisiones 2015/1523 y 2015/1601 para hacer frente a esta situación de emergencia mediante el mecanismo denominado de reubicación». En virtud de este mecanismo, los Estados miembros debían ir acogiendo, periódicamente y dentro de un periodo máximo de 2 años que vencía en septiembre de 2017 un número determinado de refugiados solicitantes de protección internacional que habían llegado a Italia y Grecia. No obstante, tal como consta en numerosos informes de la Comisión, la mayoría de los estados, entre ellos España, han incumplido estas obligaciones de reubicación.

El 21 de abril de 2017 la asociación de apoyo a la plataforma STOP MARE MORTUM, presentó una solicitud al Gobierno requiriendo a cumplir las obligaciones de reubicación de refugiados. Contra su desestimación presunta, esta entidad presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. La entidad recurrente consignó en la demanda las siguientes dos pretensiones principales: a) declarar que el Gobierno español ha incumplido las obligaciones establecidas en las referidas Decisiones, tanto las periódicas (ofrecer plazas, aprobar las listas enviadas por Grecia e Italia y acoger los refugiados) como las finales (acogida de la cuota total de refugiados al final del plazo de 2 años); y b) ordenar al Gobierno que cumpla de inmediato y con carácter urgente las citadas obligaciones.

La sentencia no estima totalmente estas pretensiones, pero sí lo hace con las más relevantes como: a) declara que el Estado español ha incumplido parcialmente las obligaciones de tramitación de las reubicaciones previstas en las Decisiones, y b) condena el Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las Decisiones y de conformidad con los acuerdos que puedan adoptar las instituciones comunitarias.

La sentencia aborda el problema del control por los órganos jurisdiccionales nacionales de los incumplimientos del Estado español de los compromisos y obligaciones contraídos al amparo de Decisiones Comunitarias. Se parte de considerar que, el control del cumplimiento de las Decisiones no es exclusivo de la Comisión Europea. Se concluye que "Dada la eficacia directa de las Decisiones, resulta posible que "el control de su cumplimiento pueda realizarse por los tribunales nacionales, atendiendo a la acción ejercitada por personas o entidades legitimadas, posibilidad que no contradice los poderes y competencias de la Comisión para plantear, si lo considera oportuno y de forma potestativa, un procedimiento por incumplimiento frente al Estado miembro".



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

2ª) Recurso ordinario 6090/2017 de 24 de octubre de 2018 Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo relativo a urbanismo.

Esta sentencia es relevante pues modifica la jurisprudencia tradicional sobre la posibilidad de "desconsolidación del suelo urbano consolidado".

La doctrina tradicional en esta materia se encuentra en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Junio de 2012: "Después de algunos pronunciamientos que podrían servir de respaldo a la línea argumental de las administraciones recurrentes, y que se citan en el desarrollo de los motivos que estamos examinando, esta sala, a partir de la sentencia de 23 de septiembre de 2008 (casación 4731/2004) viene manteniendo una línea constante y reiterada que, de forma razonada, corrige o matiza aquella interpretación anterior. La mencionada sentencia de 23 de septiembre de 2008 aborda la controversia que allí se planteaba sobre la distinción de las categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado, haciendo armónica y coherente la legislación básica estatal (Ley 6/1998, de 13 de abril) con la autonómica (en aquél caso la Ley 9/1999, de 13 de mayo, d- Ordenación del Territorio de Canarias) en el sentido de dar preferencia a "la realidad existente" sobre la- previsiones futuras de reurbanización o reforma interior contempladas en el planeamiento urbanístico.

Esta nueva jurisprudencia permite la existencia de actuaciones de reurbanización en suelo urbanizado, con la consiguiente imposición de nuevos deberes urbanístico a los propietarios, incluso cuando lo son de SUC. Pero no impone a las comunidades autónomas una determinada regulación de sus dos categorías de suelo urbano (consolidado o no consolidado). Esto es, ya no hay impedimento alguno en la legislación estatal que la legislación urbanística autonómica contemple la "desconsolidación" por el plan general de un área de SUC (esto es, su recategorización como SUNC), para así hacer posible una actuación sistemática de renovación o regeneración urbanizadora.

3ª) Recurso de Casación 339/2019 de fecha 10 de octubre de 2019, relativo a responsabilidad patrimonial y funcionamiento de la Administración de Justicia.

La importancia de esta sentencia radica en que se aplica por primera vez acordado en la sentencia 85/2019, de 19 de junio del Pleno del Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo entiende que la redacción actual del artículo 294.1 de la LOPJ, una vez suprimidos los incisos declarados inconstitucionales y, consecuentemente, nulos, ha quedado así: *"Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se /e hayan irrogado perjuicios"*.

De forma que, pese a las advertencias del Tribunal Constitucional contra el automatismo en la concesión de indemnizaciones, nos encontramos con que, "salvo los supuestos de que no se hayan irrogado perjuicios, lo que es prácticamente imposible de sostener en el caso de haber padecido prisión injusta, en todos los demás supuestos el tiempo de privación de libertad debe



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

ser indemnizado, esto es, aunque el Tribunal Constitucional defiera a los Tribunales ordinarios la fijación en cada caso de la procedencia de la indemnización, debemos concluir que partiendo de nuestra sujeción a la norma y tomando en cuenta la nueva redacción de la misma, en la que desaparece la mención "por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre", en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización".

4.- Al margen de su actividad jurisdiccional, el Pleno ha valorado que el candidato nombrado ha realizado otras actividades jurídicas de análoga relevancia así como labor docente y científica resumida en los siguientes datos:

Ha sido profesor en la Universidad de Cantabria (2009 a la actualidad), ponente en 11 cursos organizados por el CGPJ y 13 por otras instituciones nacionales e internacionales, y es autor de 3 colaboraciones en obras colectivas y 21 artículos doctrinales, si bien hay que referir que se limitó a reseñar su publicación científica desde 2017. Entre las primeras destaca *"Agua y urbanismo: la disponibilidad de los recursos hídricos"* en Cuestiones actuales de Derecho Administrativo", Ed. Aranzadi, 2018, y los Capítulos *"El informe de impacto de género en el procedimiento de elaboración de los planes de urbanismo"* y *"La interpretación judicial del art. 108 de la ley de jurisdicción contencioso administración"*, en Urbanismo: retos y oportunidades. El consultor de los Ayuntamientos, Wolters Kluwer, 2020. Entre los artículos resaltan *"El contagio por coronavirus desde la perspectiva administrativa"*, Diario La Ley, 2020 y *"La evaluación ambiental estratégica. Problemas procesales y procedimentales"* en Práctica urbanística, nº 164, 2020.

Igualmente, ha sido director de 4 cursos organizados por el CGPJ. Ha realizado una Misión técnica a Chile por encomienda del CGPJ (12 a 14.05.2003), ha sido presidente del Jurado Premio CEF Derecho Administrativo y Constitucional (2019) y miembro de la Comisión Científica del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, entre otros.

Todo lo expuesto hace del Magistrado del Tribunal Supremo César Tolosa Tribiño el más idóneo, de entre todos los/as solicitantes propuestos/as, para el desempeño de la plaza convocada.

Ocho.- Examinada y debatida propuesta de la Comisión Permanente (1.1-1, de 9 de septiembre de 2020) para provisión de la Presidencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, vacante por jubilación del anteriormente nombrado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020, acuerda nombrar Presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo a María Luisa Segoviano Astaburuaga.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada, ello sin dejar de reconocer la valía profesional y la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

excelencia de la otra candidata a la Presidencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

1.- María Luisa Segoviano Astaburuaga ingresó en la Carrera Judicial en 1987, por el turno de juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional, por lo que ostenta una antigüedad en la misma de más de 32 años.

Ha ejercido su función jurisdiccional, como magistrada, en los siguientes destinos (por orden cronológico desde la fecha de toma de posesión),: Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Bilbao (20.11.1987-16.06.1989), Juzgado de lo Social núm. 1 de Valladolid (04.07.1989-24.12.1996), presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos (10.1.1997-15.2.2002), presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid (4.3.2002-27.1.2006).

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 18 de octubre de 2006, y de conformidad con lo establecido en los artículos 127.1.c) y 343 y 344.b) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, mediante Real Decreto 1262/2006, de 27 de octubre, se promovió a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo a María Luisa Segoviano Astaburuaga, tomando posesión el 18 de diciembre de 2006 y ostentando el nº 34 del escalafón de magistrados del Tribunal Supremo, cerrado a 31.03.2018.

En cuanto a las profesiones jurídicas de análoga relevancia, la candidata nombrada fue secretaria de Magistratura de Trabajo (desde 1974 hasta 1987).

2.- La magistrada del Tribunal Supremo Segoviano Astaburuaga es la candidata que ha desarrollado y adquirido una mayor experiencia gubernativa, dada su titularidad de las Presidencias de las Salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sus sedes de Burgos y Valladolid, con su correspondiente pertenencia a la Sala de Gobierno durante diez años (1997 a 2006).

La candidata nombrada presenta un programa de actuación que estructura en cuatro bloques diferenciados. En los dos primeros, se expone minuciosamente aspectos datos sobre la situación de la Sala Cuarta y sobre la identificación de sus necesidades y, más concretamente, sobre los problemas actuales o inminentes. En los dos siguientes se lleva a cabo una serie de propuestas de solución y planificación del desarrollo de dichas propuestas.

Entre las propuestas más relevantes destacan las siguientes:

.- Carga de trabajo. Expone la posibilidad de avanzar proyectos que puedan contribuir a aliviar el número de asuntos pendientes.

.- Reparto de asuntos. Afirma la candidata designada que las normas de reparto es uno de los temas especialmente sensibles que la Presidencia de la Sala tiene que abordar.

Por el aumento del número de asuntos, las cuestiones novedosas que seguramente se van a plantear, la complejidad y variedad que presentan, hace



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

necesario perfilar las normas de reparto, manteniendo las existentes y diferenciando determinadas materias en los recursos de casación para la unificación de doctrina, así como ciertas particularidades de los recursos, por ejemplo, que se trate de asuntos repetitivos, cuestiones ya resueltas...

La propuesta consiste en partir de las normas de reparto existentes, debiendo considerarse que en los recursos de casación para la unificación de doctrina hay que distinguir determinadas materias y darles el turno correspondiente. La Presidencia ha de elaborar unas normas de reparto y someterlas a la consideración de la Sala, procediendo a fijar las mismas, una vez se haya manifestado el parecer de los Magistrados/as componentes de la Sala y se haya logrado un acuerdo, por mayoría, respecto a las normas que han de implantarse. Las normas han de someterse a finales de año a la aprobación de la Sala de Gobierno y posterior acuerdo del Consejo General del Poder Judicial acerca de su publicación.

El que todos los componentes de la Sala hayan participado en la elaboración de las normas de reparto contribuye a incrementar el sentido de trabajo en equipo, que necesariamente exige la actividad de un órgano colegiado y la implicación de todos los magistrados/as en la buena marcha de la Sala.

Asimismo, ha de potenciarse el conocimiento de los Magistrados/as de las sentencias dictadas por la sección de la que no han formado parte, proponiéndose que, de forma periódica, preferentemente semanal, se envíe a todos los miembros de la Sala copia del resumen de las sentencias dictadas. Actualmente se realiza mensualmente, si bien recogiendo las sentencias que se consideran de mayor interés, pero creo que es de gran importancia el que todos los componentes de la Sala conozcamos las sentencias que se dictan con anterioridad a que sean notificadas, ya que puede detectarse que se ha dictado una sentencia contradictoria o se ha inadmitido un recurso que la otra Sección ha resuelto en cuanto al fondo.

.- Conocimiento por la Presidencia de los asuntos que se deliberan en las dos secciones. La candidata nombrada propone potenciar la práctica vigente consistente en que al finalizar la deliberación que no preside el/la Presidente/a de la Sala, el/la que la ha presidido da cuenta por escrito y verbalmente al/la Presidente/a del resultado de la deliberación, de las incidencias surgidas, de la especial complejidad de algún asunto, de las discrepancias que hayan podido manifestarse, de la conveniencia de llevar a Pleno determinado asunto.

.- Medidas de refuerzo y apoyo: Sería conveniente activar mecanismos de refuerzo que resulten acordes con la regulación vigente ya que, como se ha consignado con anterioridad es previsible que se mantenga en el futuro el ingente aumento del número de recursos de casación y de casación para la unificación de doctrina que se ha manifestado durante los años 2015 a 2019.

.- Vacantes de larga duración. En un plano de lege ferenda, la candidata designada considera muy conveniente recuperar un sistema similar al existente hasta la reforma operada por la LO 7/2015. Con la actual regulación, desde la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

presidencia de la Sala intentaré, en su caso, contando con el apoyo de los órganos de gobierno del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, activar algún cauce para cubrir las vacantes y ausencias de larga duración por enfermedad o por cualquier otra causa, dada la incidencia que presentan en el devenir de la Sala y la descrita situación de ésta.

.- Fortalecimiento de la participación institucional en el ámbito de las actuaciones realizadas en el marco de la Unión Europea.

.- Mejora de la coordinación entre la Secretaría de la Sala y el Gabinete Técnico. Se deben propiciar las reuniones quincenales, o con la periodicidad que la práctica revele necesarias, entre la Presidencia, la Secretaría de la Sala y el Gabinete Técnico. A tal efecto concurrirían los dos coordinadores del Gabinete Técnico y los tres Letrados de la Administración de Justicia.

La finalidad es la puesta en común de los problemas y disfunciones que se observen en los recursos presentados.

.- Reforzamiento del Gabinete Técnico. Sería de gran utilidad poder contar con Letrados del Gabinete Técnico que colaboren directamente en la labor de los Magistrados/as, no solo en el aspecto puramente procesal referido a la admisibilidad del recurso, sino en cuanto a la resolución del asunto, facilitando jurisprudencia sobre la cuestión planteada e, incluso, avanzando un esquema de sentencia que sería examinado y, en su caso aprobado y completado por el Magistrado/a ponente.

Para ello sería preciso reforzar el Gabinete aumentando el número de Letrados/as que en la actualidad prestan servicios en el mismo, número que se considera exiguo, dada la carga de trabajo que soporta la Sala Cuarta, lo que haría aconsejable aumentar los efectivos en, al menos, cuatro Letrados.

.- Mediación. Se propone potenciar métodos alternativos de solución de conflictos, en concreto, potenciar la mediación, que aparece como uno de los sistemas alternativos de solución de conflictos más eficaz.

Y finalmente, la candidata nombrada lleva a cabo una serie de propuestas adicionales que versan sobre la utilización de nuevas tecnologías; protección de datos; transparencia; relación con los magistrados de los Juzgados de lo Social y Salas de lo Social de la AN y de los TSJ; relaciones con las Administraciones, Instituciones y otros entes; mejorar las relaciones con la ciudadanía velando para que se cumplan las previsiones establecidas por la Carta de los Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, potenciando la información en la forma examinada pormenorizadamente en el apartado 4.3 y protegiendo los datos personales de las personas físicas; Sala de Gobierno; y Prevención de riesgos laborales.

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de 3 sentencias, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico de la candidata nombrada, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

Estas 3 sentencias son las siguientes:



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

1ª) Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 28.10.2015, con nº de procedimiento 2753/2014 sobre el acceso al recurso de suplicación cuando se invoca vulneración de derechos fundamentales.

El motivo de relevancia no es otro que la ST reconoce la recurribilidad de las sentencias dictadas en procesos relativos a la fecha de disfrute vacaciones, expresamente excluidas del acceso al recurso de suplicación por el artículo 191.2 b) de la LRJS, cuando se reclama también la tutela de derechos fundamentales.

Ante el silencio de la Ley en esta cuestión -si es recurrible en suplicación la sentencia que resuelve reclamación sobre una materia expresamente excluida del acceso al recurso, a la que se une la reclamación de tutela de derechos fundamentales - la sentencia reconoce la recurribilidad de la sentencia de instancia. Se amplía el elenco de sentencias recurribles, aunque el proceso verse sobre materia expresamente excluida por la LRJS del recurso de suplicación, si también se reclama la tutela de derechos fundamentales. Es recurrible en suplicación toda sentencia que resuelva una demanda que verse sobre tutela de derechos fundamentales, con independencia de la modalidad procesal que se haya seguido. El Tribunal Constitucional en sentencia 149/2016, de 16 de septiembre de 2016, reconoce que es recurrible en suplicación una sentencia sobre impugnación de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual y tutela de derechos fundamentales. Cita la sentencia de esta Sala recaída en el recurso 2753/2014 y reproduce su motivación en apoyo de la solución alcanzada, señalando que el asunto resuelto por la Sala Cuarta es coincidente con el sometido a consideración del TC en cuanto al juego de la remisión del artículo 184 de la LRJS.

2ª) Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 27.02.2018, con nº de procedimiento 1112/2016 sobre sucesión de empresa en el seno del concurso.

La importancia de la Sentencia radica en que la Sala Cuarta se pronuncia por primera vez sobre si se produce sucesión de empresa, regulada en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, cuando una tercera empresa adquiere la unidad productiva autónoma de una empresa concursada en fase de liquidación del concurso. La Sala resuelve que existe sucesión de empresa entre el empresario adquirente de la unidad productiva autónoma y el empresario concursado y, en consecuencia, el adquirente es responsable de las obligaciones del concursado con sus trabajadores, que fueran anteriores a la transmisión, con independencia de que en el auto de adjudicación se hiciera constar que no se producía sucesión de empresa. Dado el gran número de empresas en concurso y que, habitualmente, en fase de liquidación una nueva empresa se adjudica la unidad productiva autónoma, las consecuencias de esta doctrina se proyectan sobre dichas adquisiciones imponiendo responsabilidades a la adquirente respecto a los trabajadores de la concursada.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

3ª) Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 06.02.2020, con nº de procedimiento 3801/2017 sobre jubilación anticipada y perspectiva de género.

El motivo de relevancia es que la Sentencia, de conformidad, con lo establecido en el artículo 4 de la LO 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aplica la perspectiva de género en la interpretación del artículo 208.1.b) último párrafo de la LGSS, que establece que, a efectos del cómputo del período mínimo de cotización exigible para acceder a la jubilación anticipada, se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria con el límite máximo de un año. Aplicando la perspectiva de género la sentencia interpreta que se ha de computar el período mínimo de cotización para acceder a la jubilación anticipada ex artículo 208.1 b) último párrafo de la LGSS, al igual que a los hombres se les computa el Servicio Militar obligatorio.

4.- Al margen de su actividad jurisdiccional, el Pleno ha valorado que la candidata nombrada ha realizado una muy amplia labor docente y una fructífera actividad de creación científica, resumida en los siguientes datos:

Es autora de 69 artículos doctrinales, de participaciones en 26 obras colectivas y de 4 prólogo de libros. Entre los primeros destacan "*Prestaciones de maternidad en supuestos de maternidad subrogada: Jurisprudencia*", en Encuentros de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con Presidentes de Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional", nº 26, 2017, y "*Litigiosidad laboral tras la conclusión del procedimiento concursal*", en Aspectos socio-laborales del concurso", nº 10, 2019. En materia de obras colectivas, también "*Derecho Social de la Unión Europea*", VV.AA. Ed. Francis Lefebvre, 2018, y "*Ley de la Jurisdicción Social*", en Comentarios, concordancias, jurisprudencia e índice analítico, VVAA, Edi. Colex, 2020.

La candidata nombrada ha sido ponente en 99 actividades de colaboración con los Servicios de Formación Continua del CGPJ y otras 150 participaciones en jornadas, seminarios y cursos organizados por otras instituciones (CEJ, Ministerio de Trabajo, Junta de Andalucía, universidades, colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, entre otros). Destacan, la ponencia "*Juzgar con perspectiva de género; Perspectiva del TJUE, TC y TS*" en el curso "La incidencia de género en la jurisdicción social. Especial referencia a la jurisprudencia comunitaria en materia de igualdad y su aplicación por los Tribunales españoles. Perspectiva de la UE", Servicio de Formación continua CGPJ, 2020; y "*La incapacidad permanente: su compleja determinación y valoración*" en el curso "Derecho vivo de la Seguridad Social", Servicio de Formación Continua, CGPJ, 2020.

La candidata designada cuenta igualmente con una amplia experiencia docente universitaria desde el año 2007 participando en diversos cursos, máster y otros programas académicos en materia laboral y social en diversas universidades y otros centros de formación públicos y privados.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

En relación con las actividades de colaboración con el CGPJ y otros órganos merece la pena subrayar las siguientes:

- i) presidenta de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid (2016 reelegida en 2020);
- ii) presidenta del tribunal calificador de las pruebas de especialización en el orden social (2010);
- iii) presidenta del tribunal calificador de las pruebas de acceso a la carrera judicial por la categoría de magistrado (2012);
- iv) profesora en el curso teórico - práctico de magistrados especialistas del orden social promoción 2008 organizado por el CGPJ;
- v) miembro de la Comisión Pedagógica del CGPJ (2013);
- vi) miembro del Consejo de Redacción de la Revista del Poder Judicial; del Consejo Asesor de la Revista jurídica de Castilla y León (2003); miembro del jurado de diversos premios jurídicos;
- vii) vocal de la Junta Electoral Central (2012 a 2017).

Todo lo expuesto hace de la magistrada del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano Astaburuaga, la más idónea, de entre las solicitantes propuestas, para el desempeño de la plaza convocada.

Nueve.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-2, de 9 de septiembre de 2020) para provisión de la Presidencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, vacante por jubilación del anteriormente nombrado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020, acuerda nombrar Presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo a Jacobo Barja de Quiroga López.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad del candidato nombrado, ello sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia del otro candidato a la presidencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

1.- Jacobo Barja de Quiroga López ingresó en la Carrera Judicial en 1981, por lo que ostenta una antigüedad en la misma de más de 39 años.

Sus destinos, por orden cronológico (desde la fecha de toma de posesión), son los siguientes:

Como juez sirvió en el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción nº 1 de Zafra (30.01.1981 a 21.02.1981) y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Medina del Campo (21.03.1981 a 12.09.1983). Como magistrado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Mataró (22.09.1983 a 11.10.1983); Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid (25.10.1983 a 26.02.1987); Audiencia Territorial de Madrid (03/03/1987 a 20.01.1989); Audiencia Provincial de Madrid (20.01.1989 a 01/06/1989); Tribunal Supremo (05.06.1989 a 21.06.2005, como magistrado del Gabinete Técnico, servicio activo); Presidente Sección nº 26 de la Audiencia Provincial de Madrid (29.06.2005 a 07.07.2014).



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 29 de mayo de 2014, y de conformidad con lo establecido en los artículos 599.1.4.^a, 343 y 344 b) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en los artículos 24 y 26 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, mediante Real Decreto 467/2014, de 6 de junio, fue promovido a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, tomando posesión el 07.07.2014.

El candidato nombrado fue magistrado del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo (1989 a 2014; desde el 23.02.2012, Magistrado Jefe del Gabinete Técnico).

2.- En relación con su experiencia gubernativa, hay que señalar que el candidato nombrado fue Vocal del Consejo General del Poder Judicial (1996-2001), así como Juez Decano de Mataró.

El candidato nombrado presenta un plan de actuación en el que, tras hacer referencia a los datos estadísticos de la situación de la Sala Quinta, y exponer algunas de sus peculiaridades, realiza las siguientes propuestas:

.- Tras las sucesivas reformas legales, sustantivas y procesales, de los años 2014 y 2015, la labor de interpretación de esta nueva normativa ha sido y es incesante desde su entrada en vigor. Para lo cual es preciso potenciar dos instrumentos, en cuya aplicación es necesario ahondar en estos años venideros.

En primer lugar, fomentar la celebración de Plenos Jurisdiccionales y no Jurisdiccionales, para llevar a cabo la necesaria labor de unificación en la interpretación de la ley. De esta manera se fijan criterios que evitan interpretaciones dispares y que, al estar revestidos de la auctoritas de la decisión plenaria, facilitan una aplicación generalizada por los órganos de instancia.

El segundo elemento es la necesaria asistencia del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, prevé expresamente la existencia de un letrado del Gabinete Técnico adscrito a la Sala de lo Militar. Su función de apoyo es cada vez más necesaria, en el estudio y análisis de los asuntos, antes de pasar a la fase de decisión, respecto de aquellos que supongan una novedad y, sobre todo, respecto a los pronunciamientos que supongan una modificación de la jurisprudencia, a fin de garantizar la oportunidad del cambio jurisprudencial y, en definitiva, la vinculación de la jurisprudencia.

.- Peculiaridades de la función jurisdiccional penal de la Sala de lo Militar. Necesaria instauración de la segunda instancia.

Los Convenios Internacionales de los que forma parte España, particularmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 -en su artículo 14.5- y el artículo 2.1 del Protocolo número 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluyen el derecho del condenado a la revisión de la sentencia por un tribunal superior.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

La generalización de la segunda instancia en el proceso penal se ha introducido por la Ley Orgánica 41/2015, de 6 de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. De esta manera ya opera una segunda instancia (apelación) en la jurisdicción penal ordinaria.

Sin embargo, a juicio del candidato nombrado, el legislador parece haber olvidado que en la jurisdicción militar también se ventilan procesos penales, por lo que no hay una completa implementación del derecho a la segunda instancia en relación con los mismos. Esta disfunción carece de sentido: el condenado en esta jurisdicción goza también del derecho a que su sentencia condenatoria y la pena que le haya sido impuesta sean sometidos a un tribunal superior. No debería modularse este derecho porque se le haya aplicado la legislación penal militar

Es patente que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se debe limitar a aplicar el Derecho procesal vigente, pero es factible que su Presidente proponga y aliente las modificaciones legales necesarias en sus relaciones institucionales con los demás poderes del Estado. Es esta una necesidad inaplazable para garantizar el derecho al doble grado de jurisdicción.

.- Peculiaridades de la función jurisdiccional contenciosa administrativa de la Sala de lo Militar. Fase de admisión.

En el ámbito contencioso – disciplinario militar, la Sala de lo Militar ejerce su labor casacional, si bien las normas de la casación propias de la jurisprudencia contenciosa – administrativa han sido objeto de una profunda modificación por la Ley 7/2015, de 21 de julio. El legislador- ha diseñado este régimen casacional previendo su aplicación por la Sala 3ª del TS, pero para su aplicación a la Jurisdicción Militar es precisa una labor de interpretación y adecuación a las necesidades de la casación militar. Especialmente, en relación con la admisión del recurso y la determinación del requisito del interés casacional.

.- La Sala de lo Militar es el vértice de la organización judicial militar, tanto en lo puramente jurisdiccional como en lo orgánico. De ahí la necesaria potenciación de la Sala y del Tribunal Supremo en el ámbito de la jurisdicción militar, sobre la base del sentimiento de pertenencia a un mismo poder del Estado.

Es cierto que la ley no exige que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo sea oída, con carácter previo, en los nombramientos propios de la jurisdicción militar, pero, a juicio de candidato nombrado, sería muy conveniente que se introdujera (para lo cual no es preciso ningún cambio legislativo).

.- Medidas de funcionamiento de la Sala. La aplicación de las nuevas tecnologías y la situación vivida en los últimos meses ha permitido a la Sala experimentar formas novedosas de trabajo.

El candidato designado considera necesario normalizar la deliberación por medios telemáticos, si bien dotados de la necesaria seguridad que garantice la confidencialidad del acto de deliberación. En este aspecto, se considera positiva



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

la experiencia de contar con un trabajo previo y preparatorio por escrito para agilizar el momento de la deliberación. A ello se debe unir la utilización general de firma electrónica.

Por otra parte, sin perjuicio de que la media de tiempo de resolución de asuntos demuestra la celeridad con la que trabaja la Sala, es preciso extremar el control del plazo de tramitación del recurso correspondiente, para reducir más aún la respuesta.

.- Medidas en materia de relaciones institucionales.

En este ámbito, el candidato nombrado considera imprescindible el contacto y la comunicación fluida con los Jueces y Tribunales de la Jurisdicción Militar, en cuanto integrantes del Poder Judicial. Lo que necesariamente se debe reflejar en la organización de cursos, encuentros y cualquier otro tipo de foro, que promueva el debate jurídico y el intercambio de experiencias.

Además, esa comunicación y contacto debería establecerse con Tribunales u órganos extranjeros que conozcan de materias similares a las propias de la Sala de lo Militar, por el enorme interés y beneficio del intercambio de experiencias mutuas.

Para lograr estos objetivos, propone que las Jornadas de Derecho Militar tengan carácter anual, versando sobre materias monográficas que tengan relación e incidencia en la jurisdicción militar. Tales Jornadas deberían estar abiertas a Magistrados de otras Salas del Tribunal Supremo, a otros Tribunales similares de países extranjeros y también a los profesionales de la Universidad

3.- En relación con la actividad jurisdiccional, tanto la selección general de resoluciones como la más específica, de 3 sentencias, demuestran por sí solas la extensión y rigor del conocimiento jurídico del candidato nombrado, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

Estas 3 sentencias son las siguientes:

1ª) Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo 68/2016, de 31 de mayo, con número de procedimiento 1/2016 sobre penal.

La relevancia de esta resolución radica en que la circunstancia eximente de estado de necesidad suele alegarse en el ámbito castrense en relación con los delitos de abandono de destino lo que se produce con personal del Ejército, pero no entre los miembros de la Guardia Civil.

Pero esta sentencia hace hincapié en la colisión de deberes de actuar y aplica la teoría de determinar el deber preponderante. Todo ello dando lugar al incumplimiento de una orden, lo que constituye desobediencia. Estableciendo la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en su artículo 16 que "los miembros de la Guardia Civil deberán adecuar su situación profesional a los principios de jerarquía, disciplina y subordinación".

2ª) Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo 62/2017, de 18 de mayo, con número de procedimiento 10/2017 sobre penal.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

La relevancia de esta resolución radica en dos cuestiones, por una parte, supone afirmar que a la instrucción militar también le son aplicables los plazos de la LECrim y, por otra parte, en que es la primera sentencia del TS que se refiere al artículo 324 de la LECrim e incide en la necesidad de su cumplimiento y en la importancia de la cláusula de exclusión que contiene.

3ª) Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo 32/2018, de 22 de marzo, con número de procedimiento 117/2017 sobre penal.

El motivo de relevancia de esta resolución no es otro que poner de manifiesto que, en el ámbito castrense, donde son habituales las órdenes, el cumplimiento de las mismas está sometido a límites. El límite es siempre el ordenamiento jurídico, por lo que no deben ser cumplidas aquellas órdenes que constituyan mandatos antijurídicos. Además, no sólo no deben cumplirse las órdenes que supongan infracción de ley, en sentido formal, sino también aquellas que vayan contra el ordenamiento jurídico.

4.- Al margen de su actividad jurisdiccional, el Pleno ha valorado que el candidato nombrado ha realizado una muy amplia labor docente y una fructífera actividad de creación científica, resumida en los siguientes datos:

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Apto cum laude, 1989) ha sido profesor del Centro de Estudios Judiciales (1989 a 1996), profesor de Derecho Penal del Centro de Estudios Universitarios (CEU) desde 1984 a 1996 y profesor de la Universidad Complutense de Madrid (2001 a 2004).

Ha sido ponente o conferenciante en 20 cursos, seminarios y jornadas organizados por el CGPJ, co-director de 2 cursos del CGPJ. Asimismo, ha sido ponente en más de 120 cursos, jornadas y congresos organizados por diversas institucionales e internacionales. Entre ellas, destacan las conferencias "*Nueva jurisprudencia sobre blanqueo de dinero*", Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, FIDE, 2014; "*Los delitos económicos*", Observatorio de Derecho Penal y Delitos Económicos, KPGM-Expansión, 2009; "*Veinte años de historia del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo*" en XX Aniversario de la creación del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Madrid, 2005; conferencia "*La responsabilidad del superior y la obligación de obedecer del subordinado*", en Jornadas de Derecho Penal Internacional, Univ. Alfonso X El Sabio; 2017; y conferencias en el Máster en Derecho Militar de la Universidad Católica San Antonio de Murcia sobre la segunda instancia en el ámbito castrense (2018) y sobre las denuncias internas en la Administración militar (2019).

Igualmente, ha impartido varias conferencias en la Escuela Militar de Estudios Jurídicos del Ministerio de Defensa, tanto en los cursos a recién ingresados tras aprobar la oposición del Cuerpo Jurídico Militar como en los cursos para ascenso a Comandante Auditor, tratando de los delitos en el ámbito castrense o las novedades en el procedimiento penal tras las últimas reformas de la LECrim, que es subsidiaria respecto de la Ley Procesal Militar.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

El candidato nombrado es autor o coautor de una treintena de libros y textos legales con jurisprudencia sistematizada; autor de más de 80 artículos doctrinales y de participación en obras colectivas, de 6 prólogos, de 16 traducciones del inglés, francés y alemán, y 8 reseñas.

Por su contenido jurídico militar, destacan los siguientes artículos *"El valor vinculante de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su relación con la jurisdicción militar"*, *"Los delitos imprudentes en el ámbito militar"*, *"Los límites de la obediencia"* y *"Las lesiones en el ámbito militar"*, todos ellos en Revista Española de Derecho Militar (2014, 2015, 2017 y próxima publicación, respectivamente). También los capítulos *"Los delitos contra los deberes del servicio (I)"* y comentarios a los artículos 51 a 55 del Código Penal Militar, en El Código Penal Militar de 2015, Ed. Titant lo Blanch, 2017. Como obra legal con jurisprudencia comentada destaca *"Código de leyes militares"*, Ed. Colex, 2019

Todo lo expuesto hace del Magistrado del Tribunal Supremo Jacobo Barja de Quiroga López, el más idóneo, de entre los solicitantes propuestos, para el desempeño de la plaza convocada.

Frente a este acuerdo formula voto particular la Vocal María Concepción Sáez Rodríguez.

Diez.- Retirar la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-1, de 2 de julio de 2020) para su conocimiento en un próximo Pleno, la provisión de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Once.- Retirar la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-2, de 2 de julio de 2020) para su conocimiento en un próximo Pleno, la provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial Ourense.

Doce.- Retirar la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-3, de 9 de septiembre de 2020) para su conocimiento en un próximo Pleno, la provisión de la plaza de Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla con sede en Málaga.

Trece.- Retirar la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-2, de 8 de septiembre de 2020) para su conocimiento en un próximo Pleno, la provisión de la plaza de Presidente de la Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Catorce.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-14, de 24 de septiembre de 2020) para la provisión de una plaza de profesor/a de la Escuela Judicial, Área de Derecho Constitucional y Unión Europea), el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 30



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

de septiembre de 2020 acuerda nombrar para la provisión del referido puesto a Tais Deus Ramos.

Tais Deus Ramos es miembro de la Carrera Fiscal desde el año 2009. Su primer destino fue la Fiscalía de Área de Mataró – Arenys de Mar, siendo Fiscal de Enlace en Cooperación Internacional y en Criminalidad Informática desde diciembre de 2015. Desde 2018 está destinada en la Fiscalía Provincial de Barcelona – Sección Territorial de L'Hospitalet de Llobregat. Actualmente está en comisión de servicios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco del programa de intercambio organizado por la European Judicial Training Network para autoridades judiciales.

El nombramiento para el puesto de profesor/a ordinario/a de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial se realiza por un período de dos años, prorrogable anualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 625.2 de la LOPJ, en su redacción dada por la LO 4/2013, de 28 de junio, por lo que la candidata nombrada quedará en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal, durante el tiempo que desempeñe el puesto para el que ha sido nombrada.

Este nombramiento se fundamenta en los principios de mérito y capacidad en relación con las características del puesto a proveer. Sin desmerecer la valía profesional de los/as restantes candidatos/as, el Pleno ha valorado la idoneidad de Tais Deus Ramos para el puesto de profesor/a de la Escuela Judicial (área de Derecho Constitucional y de la Unión Europea), al considerar que concurren en ella, más que en relación al resto de candidatos/as, todos los méritos específicos del puesto de trabajo.

Al margen de su actividad profesional como fiscal, desde una perspectiva académica hay que destacar que es Máster en Ciencias Jurídicas Avanzadas por la Universidad Pompeu Fabra (2012-2014) y tiene experiencia en proyectos internacionales lo que evidencia en su participación en el proyecto "*Mejorando la cooperación judicial europea*" (Proyecto JUST/2013/JPEN/AG/4475), estancia en la Fiscalía de Rumanía (2015) o Short Term Expert en el Proyecto Twinning de la Unión Europea "*Strengthening the Victim's Rights in the Criminal Justice System*", TR 14 IB JH 02, Ankara (2017-2018).

Tais Deus Ramos cuenta, igualmente, con una muy amplia actividad discente participando en 55 cursos de formación continua organizados por distintas instituciones nacionales e internacionales, con una clara prevalencia de materias relacionadas con Derecho Internacional, de la Unión y de cooperación internacional.

Igualmente, la candidata nombrada ha impartido docencia en el ICA de Mataró en el Curso Práctico para el Acceso a la Abogacía (2015 y 2016), ha sido ponente o comunicante en 15 cursos, jornadas y seminarios organizados por varias instituciones nacionales e internacionales, entre las que destacan la ponencia "*La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de violencia contra la mujer*", Escuela Judicial, Barcelona (2019), la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

ponencia *"The (limited) effectiveness of MLA Instruments in the digital age"*, Academy of European Law, Dublín, 2018, o la ponencia *"Extradición y derechos fundamentales: jurisprudencia del TEDH en materia de cooperación judicial penal"*, Centro de Estudios Jurídicos, Madrid, 2017.

La candidata designada acredita el nivel C2 en Inglés, nivel C1 en Alemán y un A2 en Francés.

La combinación de todos los elementos destacados y otros más que aparecen especificados en el currículo presentado por la candidata, así como la entrevista personal de la aspirante, ha llevado al Pleno a considerar que Tais Deus Ramos presenta el perfil más idóneo para el desempeño del puesto convocado, sin desmerecer en absoluto la valía profesional del resto de candidatos.

Quince.- Aprobar, por asentimiento, la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-5, de 24 de septiembre de 2020) relativa a la corrección de error de las bases que han de regir la convocatoria de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Granada.

Dieciséis.- Aprobar en los términos de la Propuesta de la Comisión Permanente (3-1, de 19 de agosto de 2020) la renovación por un año del nombramiento de María Rosario Barrio Pelegrini, con efectos del día 18 de octubre de 2020, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como letrada del Servicio de Inspección, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.

Diecisiete.-Aprobar en los términos de la Propuesta de la Comisión Permanente (3-2, de 19 de agosto de 2020) la renovación por un año del nombramiento de Virginia Montejo Labrada, con efectos del día 18 de octubre de 2020, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como letrada del Servicio de Inspección, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.

Dieciocho.- Aprobar en los términos de la Propuesta de la Comisión Permanente (3-3, de 19 de agosto de 2020) la renovación por un año del nombramiento de Zayda María Sierra Sánchez, con efectos del día 18 de octubre de 2020, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como letrada del Servicio de Inspección, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Diecinueve.-Aprobar en los términos de la Propuesta de la Comisión Permanente (3-4, de 19 de agosto de 2020) la renovación por un año, con efectos del día 10 de octubre de 2020, del nombramiento de Carlos Ricardo Puigcerver Asor, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como inspector delegado en el Servicio de Inspección, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.

Veinte.- Aprobar en los términos de la Propuesta de la Comisión Permanente (3-5, de 19 de agosto de 2020) la renovación por un año, con efectos del día 3 de octubre de 2020, del nombramiento de Carmen Isabel Ortiz Rodríguez, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como profesora del Área de Primera Instancia del Servicio de Formación Inicial de la Escuela Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.

Veintiuno.- Aprobar en los términos de la Propuesta de la Comisión Permanente (3-6, de 19 de agosto de 2020) la renovación por un año, con efectos del día 17 de octubre de 2020, del nombramiento de Carmen Robles Gil, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como jefa de Área en el Servicio del Promotor de la Acción Disciplinaria, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.

Veintidós.-Aprobar en los términos de la Propuesta de la Comisión Permanente (3-7, de 19 de agosto de 2020) la renovación por un año, con efectos del día 28 de octubre de 2020, del nombramiento de María del Mar Martínez Sánchez, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como jefa de Área del Centro de Documentación Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.

Veintitrés.- Aprobar, por asentimiento, el informe sobre el Proyecto de orden por la que se constituyen los archivos judiciales territoriales de Cádiz, Granada, Huelva y Jaén de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de lo



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

dispuesto por el Real Decreto 937/2003, de 18 de Julio, de Modernización de los Archivos Judiciales.

Veinticuatro.- Aprobar, por mayoría, el informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de selección de candidaturas propuestas por España a Jueces y Abogados Generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a juez titular y jueces "ad hoc" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Veinticinco.- Aprobar, por unanimidad, el informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 3/83, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, para la supresión de aforamientos en materia penal.

Veintiséis.- Desestimar el recurso de alzada núm. 201/20 interpuesto por XXX, actuando en nombre y representación de XXX, contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de este órgano constitucional adoptado en reunión de fecha 16 de junio de 2020 en el seno del expediente disciplinario núm. 35/2019, instruido por su actuación como XXX, por el que se le impone una sanción de multa de 550 euros como autora disciplinariamente responsable de una infracción grave del artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.

Veintisiete.- Rechazar, por mayoría, la propuesta de resolución que formula el vocal Francisco Gerardo Martínez Tristán, ponente, de estimar el recurso de alzada núm. 114/2020, interpuesto por XXX, actuando en nombre y representación de XXX, contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de este órgano constitucional, de fecha 12 de febrero de 2020, por el que se le impone, por su actuación como XXX, una sanción de suspensión de funciones por tiempo de 45 días, por una infracción disciplinaria de desatención en el ejercicio de los deberes judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Orgánica del Poder Judicial. Se designa nuevo ponente en la persona del vocal Wenceslao Francisco Olea Godoy.

Formula voto particular el vocal Francisco Gerardo Martínez Tristán, al que se adhieren los vocales Rafael Mozo Muelas, José Antonio Ballesteros Pascual, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya y José María Macías Castaño.

Veintiocho.- Desestimar el recurso de alzada núm. 233/20 interpuesto por don XXX contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial de fecha 27 de julio de 2020, dictado en el seno del expediente disciplinario 39/2019, instruido por su actuación en XXX por el que se le impone una sanción de suspensión de funciones, por tiempo de cinco días, como



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

responsable de una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.

Vº Bº Presidente

Secretario General